

Cuando la escuela deja de ser refugio

El brutal asesinato de una inspectora al interior de un colegio en Calama no solo conmociona por su crudeza. Remueve algo aún más profundo: la pérdida de una certeza básica sobre la cual se ha construido históricamente la vida en sociedad, que la escuela es un espacio seguro.

El hecho, ocurrido el pasado 27 de marzo, donde un estudiante atacó con un arma blanca a funcionarios y alumnos, dejando una víctima fatal y varios heridos, marca un punto de inflexión. Ya no hablamos únicamente de conflictos entre pares, ni de episodios aislados de violencia escolar. Lo que emerge con fuerza es una crisis estructural que ha ido incubándose silenciosamente y que hoy estalla de la peor forma posible.

Un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba revela que un 78,9% de las personas percibe la violencia escolar como frecuente o muy frecuente, mientras apenas un 36,6% considera que los colegios son espacios seguros. Es decir, la tragedia de Calama no irrumpe en el vacío: se inscribe en una percepción social ya deteriorada, donde la escuela ha comenzado a perder su rol protector.

La reacción inmediata del Gobierno —anunciar medidas como detectores de metales y refuerzos de seguridad— responde a la urgencia y también, a la presión pública. Sin embargo, el riesgo es evidente: confundir el síntoma con la enfermedad.

Convertir los establecimientos educacionales en espacios de control puede ser necesario en determinados contextos, pero difícilmente será suficiente. La evidencia es clara: la ciudadanía no solo exige seguridad, sino también prevención. Más participación de las familias, mayor autoridad docente, apoyo psicológico y herramientas reales para abordar conflictos antes de que escalen.

El problema, entonces, no comienza en la puerta del colegio. Comienza mucho antes, en hogares tensionados, en comunidades fragmentadas, en entornos digitales que amplifican la violencia y en un sistema educativo que muchas veces carece de herramientas para contenerla. La escuela, en este escenario, no es el origen del problema, pero sí el lugar donde todas esas fracturas convergen.

Por eso, lo ocurrido en Calama debe leerse como una advertencia mayor. No basta con reforzar protocolos ni endurecer sanciones. Se requiere una política integral que entienda la violencia escolar como un fenómeno social complejo, que involucre a la familia, al Estado y a la comunidad en su conjunto. Porque cuando una inspectora muere en su lugar de trabajo —un colegio— no solo falla la seguridad, fallan las certezas que todas las familias tenemos de que la escuela “es un lugar seguro”.